

*La Elite no Quiere, la Sociedad no Puede*

26, Sept., 1990

## Larga Transición Mexicana

- ★ Clara Resistencia al Advenimiento de la Democracia
- ★ Tal vez en 1991 los Electores Puedan Hacerse oír
- ★ Acelerado Cambio Económico; Dosificado el Político

LORENZO MEYER

El problema de la democracia mexicana hoy, se puede resumir así: la élite no quiere y la sociedad no puede. Pareciera que estamos en una situación de empate entre las fuerzas del pasado y las exigencias del futuro, y nadie tiene claro cuál será, finalmente, el desenlace. Desafortunadamente, lo que está en riesgo es mucho y una equivocación sería realmente costosa.

En las experiencias internacionales tenemos, por lo menos, dos modelos de transición del autoritarismo a la democracia, pero ninguno parece prefigurar el camino que México va a transitar. En España contamos con un ejemplo de transición que fue en gran medida el resultado de la combinación de inteligencia y sensibilidad en las cúpulas y de la madurez de la sociedad. En efecto, los herederos del franquismo decidieron negociar con las principales fuerzas políticas —incluidas las de oposición— y gracias a esa voluntad de negociación lograron superar obstáculos formidables

# LARGA TRANSICION MEXICANA

Segue de la primera plana

—el del golpe militar, entre otros— y llevar a España a una auténtica democracia política, lo que permitió a ese país integrarse definitivamente al mercado europeo y a la verdadera modernidad. El otro modelo de transición lo provee Polonia y otros países del este europeo. Ahí se tiene el caso de una sociedad civil que en un arranque insospechado de energía política aprovechó la crisis económica estructural del "socialismo real" para imponerse y derrumbar a las burocracias autoritarias. Sin embargo, todo indica que el tránsito mexicano a la democracia, en caso de darse, no será por ninguna de estas dos vías.

En México, el grupo en el poder parece dispuesto a la gran negociación con el conjunto de sus opositores, pues el requisito indispensable para llevar a todos a la mesa de los acuerdos es el de las elecciones transparentes. La vía electoral como el medio del cambio fue desechada a mediados del sexenio delamadridista y desde entonces no hay señales claras de un cambio de actitud. Como se recordará, la victoria priista sin credibilidad

en 1986 en Chihuahua, fue el preludio de otra similar pero de mucho mayor importancia, en 1988. La esperanza renovada que surgió con el reconocimiento oficial de la victoria de la oposición en Baja California en 1989, fue apagada de inmediato con la incredulidad que despertaron los resultados electorales de Michoacán y Guerrero y, posteriormente, con la aprobación de la nueva ley electoral, que va a permitir, entre otras cosas, que el gobierno siga siendo juez y parte del proceso electoral, y que el partido mayoritario tenga más de la mitad de los asientos en el Congreso, aun en el caso de que su triunfo en las urnas haya sido por una proporción menor.

Se debe convenir en que la democracia puede tener muchos atractivos pero generalmente su nacimiento no es uno de ellos. El parto democrático es muy doloroso —la Revolución francesa, las guerras de independencia y de secesión en Estados Unidos, la derrota en la Segunda Guerra Mundial en el caso de Alemania, Japón o Italia, la lucha anticolonial y la cruenta separación de

Pakistán en el subcontinente indio, etcétera—, pero lo peor no es eso, sino que puede ocurrir que una sociedad sufra todos los dolores de la gestación y del parto, pero que al final el nacimiento de la democracia se frustré. Esa ha sido la experiencia mexicana y existe el peligro de que se vuelva a repetir.

El triunfo final de los liberales encabezados por Benito Juárez en el siglo pasado no desembocó en la democracia —posibilidad improbable dadas las condiciones sociales y económicas de la época— sino en una dictadura liberal que, pudorosamente, se negó a decir su verdadero nombre. Al principiarse el nuevo siglo, la lucha civil desatada por el grupo antirreeleccionista y democrático encabezado por Francisco Madero, terminaría por cambiar muchas cosas en México pero no el autoritarismo político; al contrario, a éste lo hizo más sutil y, por lo tanto, más fuerte al evitarle el problema de tener que depender de la fragilidad y vulnerabilidad de un líder. La Revolución mexicana hizo carismática a la presidencia no al presidente, y dotó a esa presidencia de un partido estatal que se desempeñó como una estructura subordinada, dúctil, con gran penetración social, y que le permitió ligarse con el México real y masivo. A partir de su consolidación, la Revolución mexicana dio a la sociedad que la había sufrido durante su etapa destructiva, sentido de nacionalidad y de objetivos sustantivos: justicia social, desarrollo material y moral, independencia frente a las grandes potencias, etcétera. Pero, en cambio, le negó su promesa inicial: la de instaurar la democracia política.

Hoy, tras casi un decenio de estancamiento económico, de decrecimiento del nivel de vida del mexicano promedio, de pérdida de la confianza en la buena marcha histórica de la nación —no es fácil suponer que pronto pueda México abandonar su condición de país subdesarrollado—, la sociedad mexicana una vez más ha vuelto a pagar la cuota de sufrimiento que le puede dar derecho a ingresar al grupo de naciones democráticas. Sin embargo, tampoco ahora es seguro que esta vez la demanda democrática si se haga realidad. En 1988, los votantes exigieron al gobierno que abriera el espacio necesario para institucionalizar, finalmente, la competencia electoral como la fuente de legitimidad. Sin embargo, ese gobierno se negó a es-

cuchar la demanda, y la sociedad mexicana, sin partidos u organizaciones opositoras de gran penetración, fuertes y con capacidad de apoyar su demanda con movilizaciones masivas y con espíritu de victoria (como si fue el caso de Polonia, Checoslovaquia o Rumania, por ejemplo) no pudo imponer su voluntad. No obstante, aún no se puede decir que el electorado mexicano haya aceptado su derrota; quizá en 1991 vuelva a aprovechar la ocasión para hacerse oír.

La debilidad política de la sociedad mexicana frente a su gobierno es explicable. Una de las características del periodo que va del fin de la Segunda Guerra hasta principios del decenio de los ochenta es, por un lado, la apertura de canales para procesar las demandas corporativas y, por el otro, la desmovilización sistemática del electorado como prerrequisito indispensable para la estabilidad del sistema de partido "casi único". En estas condiciones, para el mexicano promedio, el costo y el riesgo de convertirse en opositor político activo, eran, y siguen siendo, demasiado altos en relación al hipotético beneficio.

Por otra parte, aunque no es justificable, si es comprensible la resistencia de la élite priista a dejar a la impredecibilidad de las urnas su "derecho histórico" a seguir ejerciendo el poder. La justificación implícita pero clara de su resistencia al advenimiento de la democracia, no es sólo el deseo egoísta de no querer perder los innumerables beneficios personales que da el poder autoritario, sino lo que ellos consideran un sentido de responsabilidad. El mensaje que nuestros gobernantes nos están enviando no por la vía del discurso sino de los hechos, es el siguiente: sólo el equipo tecnocrático salinista está en la capacidad de hacer trazar a la sociedad mexicana hasta la última gota de la amarga medicina de la modernidad —el neoliberalismo—; cualquier otro grupo político —los dinosaurios del PRI o el PRD— cedería a las tentaciones populistas y desaprovecharía la

oportunidad histórica de poner a México a tono con las corrientes económicas que han triunfado en las economías centrales. Desde esta perspectiva, sólo cuando la transformación económica estructural se haya completado —allá por el año 2000— estará la sociedad mexicana preparada para asumir las responsabilidades que implica la democracia política.

La historia, desde luego, no se repite, pero en cierto sentido la actual élite del poder pareciera empeñada en querer hacerlo en relación a su modelo modernizador. El neoliberalismo se parece enormemente a un neoporfirismo. Como todos sabemos, la modernización mexicana del siglo XIX tuvo un carácter parcial. El Porfiriato decidió concentrar toda su energía en llevar a cabo la transformación económica del país y pospuso el cambio político por considerar que éste podría ser disfuncional a su magno proyecto económico. Para los tecnócratas porfiristas, los mexicanos deberían primero ingresar al mundo de la economía capitalista para luego poder ser verdaderos ciudadanos. En teoría, el razonamiento sonaba convincente, sobre todo para los que se beneficiaban de las acciones modernizadoras —ensanchamiento del latifundio a costa de la destrucción de la propiedad comunal, concesiones ferroviarias, mineras, bancarias, monopolios comerciales, etcétera—, pero en la práctica su resultado final fue catastrófico incluso desde el punto de vista estrictamente económico. En efecto, a partir de 1911 la violenta puesta al día de las estructuras políticas se hizo a costa de la economía, que no volvió a ver la suya sino hasta después de 30 años. Hoy estamos de nuevo en un proceso de cambio donde la acelerada transformación económica, se dice, requiere como condición fundamental un cambio político lento, dosificado. La falta de correspondencia entre economía y política puede, otra vez, tensar la trama del sistema social en su conjunto y llevarlo a situaciones peligrosas. A pocos mexicanos nos interesa experimentar la repetición de esa parte de nuestra historia, hay que evitarla.